

tivo lo que se previno en el auto anterior, sobre reposición del papel, con el del sello correspondiente. Lo decretó y firmó el suscrito Juez tercero suplente de Distrito. Doy fé.—*José de Jesus Lopez.*—Ante mí.—*Antonio Garcia Mozqueira.*

Es copia que certifico, la cual se saca en cumplimiento de lo mandado, para su insercion en el Semanario Judicial. Puebla, Octubre 27 de 1873.—*Antonio Garcia Mozqueira.*

### *Ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia.*

México, Diciembre 29 de 1873.—Visto el juicio de amparo promovido por el C. Lic. Andres Torres Serrato ante el Juzgado de Distrito de Puebla, contra el Gobierno del Estado, que lo destituyó del empleo de procurador de primera instancia, sin formación de causa. Visto el informe de la autoridad responsable del acto reclamado, en que ninguna razón alega como fundamento para tal procedimiento; lo pedido por el C. Promotor fiscal; lo alegado por el promovente; la sentencia del inferior, y cuanto mas de autos consta y se tuvo presente, y considerando: que si bien es cierto que segun el espíritu de la Constitución federal, no hay propiedad en los empleos, tambien lo es, que en casos como en el presente, estan escepcionados los empleos que tengan tiempo determinado para su desempeño. Que la Constitución del Estado, previene que los funcionarios que no tengan señalado tiempo de su duración, permanecieran en sus destinos todo aquel á que los hagan acreedores sus servicios y buena conducta; y que el funcionario que promovió este juicio, tenia tiempo señalado por la ley de su creación: que tampoco aparece cierto que el C. Torres Serrato haya sido nombrado por la autoridad militar, sino con los requisitos establecidos por la misma ley, y que la destitución de que se queja el promovente sin previa formación de causa, im-

porta la violación de los artículos 16, 21 y 27 constitucionales.

Por estas consideraciones, y por los propios legales fundamentos del Juzgado de Distrito de Puebla, se decreta: que es de confirmarse y se confirma la sentencia que declaró: que la Justicia de la Union ampara y protege al C. Lic. Andres Torres Serrato, contra la determinación del C. Gobernador del Estado que lo destituyó del empleo de procurador de primera instancia.

Devuélvase los autos al Juzgado de su origen, con copia certificada de esta sentencia; publíquese, y archívese á su vez el Toca.

Así por mayoría de votos lo decretaron los CC. Presidente y Ministros que formaron el Tribunal pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, y firmaron.—*José M. Iglesias.*—*Juan J. de la Garza.*—*José Artaga.*—*Ignacio Ramirez.*—*M. de Castañeda y Nájera.*—*J. M. del Castillo Velasco.*—*S. Guzman.*—*L. Velasquez.*—*José Garcia Ramirez.*—*Enrique Landa*, secretario.

Es copia que certifico. México, Enero 13 de 1874.—*Lic. Emilio Ordaz*, oficial mayor.

## AMPARO.

*Promovido por los Sres. Bartinng hermanos y C<sup>a</sup> ante el Juzgado de Distrito de Sinaloa, contra el C. Tesorero general del Estado, que se negó á recibirles cierta cantidad de dinero en moneda de cobre, en pago de derechos de consumo de efectos extranjeros.*

PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

C. Juez de Distrito.

El Promotor fiscal ha examinado la solicitud de amparo hecha por los Sres. Bar-

tinng Hermanos y C<sup>a</sup> fundada en que por no admitirlos en moneda de cobre el pago de derechos de consumo de algunas mercancías, crean violadas en sus personas las garantías que le concede el artículo 27 de la Constitución general de la República, como invadida por el Estado con la expedición de las leyes de 31 de Diciembre y 23 de Abril últimos, la esfera de las atribuciones federales, que aunque no cita parece que debe ser, por no ser contrarias á la fracción XXIII del artículo 72 de la misma Constitución. Pues bien, O. Juez, el Promotor fiscal encuentra que con la expedición de dichas leyes no se ha violado la garantía del artículo 27, puesto que no se ha ocupado la propiedad de los Sres. Bartinng, ni tampoco se puede decir que esas leyes se oponen á la fracción XXIII, puesto que no se ocupan del establecimiento de casas de moneda, ni fija las condiciones que éstas deban tener, ni tampoco se ocupa de la extranjera ni de adoptar un sistema general de pesos y medidas. Por lo expuesto, y teniendo presentes las observaciones y fundamentos legales del informe del C. Tesorero general del Estado, el fiscal concluye diciendo: Que se declare que la Justicia de la Union no ampara ni protege á los Sres. Bartinng Hermanos y C<sup>a</sup>, contra los procedimientos del C. Tesorero general del Estado, que no admite en pago de derechos de consumo, la moneda de cobre que circulaba en el Estado.

Mazatlan, Setiembre 2 de 1873.—L. Gaona.

#### *Sentencia del O. Juez de Distrito.*

Mazatlan, Setiembre 30 de 1873.—Visto éste juicio de amparo promovido por los Sres. Bartinng Hermanos y C<sup>a</sup> de este comercio, contra la providencia del C. Tesorero general del Estado, por la que se rehusa á recibir la cantidad de trescientos diez y siete pesos, sesenta y un centavos de mo-

TOMO V.—PARTE II.

moneda de cobre, en pago de derechos de consumo, á virtud de reputar violada en sus personas la garantía que otorga el art. 27 de la Constitución general, y de invadirse la esfera federal con la ejecución del decreto de la legislatura del Estado fecha 30 de Diciembre de 1872. Visto el informe del C. Tesorero general; lo pedido por el C. Promotor fiscal; las pruebas rendidas por los quejosos; los alegatos que se produjeron; la citación para sentencia y todo lo demás que de autos consta y ver convino.

Considerando: que la moneda de cobre que amortizó el decreto de la legislatura del Estado, no es una moneda emitida con arreglo á las prescripciones de la ley de 2 de Agosto de 1823 y demás posteriores relativas, pues es público y notorio que esa moneda carece del tipo y peso que mandan esas leyes, por lo cual no debe considerarse como moneda legal.

Considerando: que no fué emitida por la autoridad federal, única facultada por todas las leyes de la República para acuñar moneda, pues de la que se trata lo fué por las autoridades locales del Estado de Sinaloa y por varios gefes militares, segun se ve en la noticia que sobre amonedación de cobre en el Estado, publicó el periódico oficial del mismo en 20 de Febrero del corriente año, y el cual queda agregado á fojas 10 de este expediente; moneda que no tenía ni el peso ni el tipo legal, segun se ve en el segundo considerando del decreto de la legislatura ya citada.

Considerando: que la negativa del C. Tesorero general del Estado en recibir esa misma moneda, no puede nunca causar expropiación, supuesto que no es moneda legal y no puede alegarse despojo de propiedad, supuesto que no ha habido la expropiación á que se refiere el precepto constitucional.

Considerando en cuanto á la invasión de la esfera federal que alega la contraria: que la legislatura del Estado al prohibir la circulación de esa moneda que carece de los requisitos de la ley, lo hizo en virtud de que

en el comercio había caído en completo desprestigio, y que ya no podía servir para el tráfico ni para el pago de contribuciones como lo dice la propia legislatura en el primer considerando de su decreto de 30 de Diciembre de 1872; y por último: que la misma legislatura en ese decreto, al mandar que las contribuciones se paguen en plata ó oro, supuesto que la ya tantas veces referida moneda de cobre no puede ser considerada como legal por las razones anteriormente expuestas, ese decreto no invade la facultad federal que los quejosos creen vulnerada.

Por estas consideraciones y de conformidad con lo pedido por la parte fiscal, y la opinión del C. Asesor, falló con las proposiciones siguientes:

Primera: La Justicia de la Union no ampara ni protege á los Sres. Bartinng Hermanos y C<sup>a</sup>, contra la providencia del C. Tesorero general del Estado, en virtud de no recibir moneda de cobre del Estado en pago de derechos de consumo, por no violarse en la persona de los quejosos la garantía que otorga el artículo 207 de la Constitución federal, ni invadirse la esfera federal, ni vulnerarse la facultad que la fracción XXIII del artículo 72 de la misma Constitución concede al Congreso de la Union.

Segunda: Notifíquese, y sacándose dos copias, una para el Semanario judicial, y la otra para que se publique en los periódicos de esta Ciudad, remítanse los autos á la Suprema Corte de Justicia para su revision.

Así definitivamente juzgando lo decretó y firmó el C. Maximino Barragan, primer suplente del Juzgado de Distrito del Estado, en ejercicio.—Doy fé.—*Maximino Barragan.*—*Francisco Medina*, secretario.

### *Ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia.*

México, Diciembre 18 de 1872.—Visto el faicio de amparo promovido por los Sres. Bartinng Hermanos y C<sup>a</sup> ante el Juzgado de Distrito del Estado de Sinaloa, contra el C. Tesorero general del Estado que se negó á recibirles la cantidad de trescientos diez y siete pesos sesenta y un centavos, en moneda de cobre, en pago de derechos de consumo de efectos extranjeros. Visto el informe de la autoridad responsable del acto reclamado; lo alegado por el quejoso; lo pedido por el C. Promotor; la sentencia que con dictámen de asesor pronunció el Juez primer suplente, y todo lo demás que de autos consta y se tuvo presente, y considerando: que la moneda de cobre que circulaba en Sinaloa con un valor legal superior al de la materia de que está formada, quedó reducida á esto último por la ley del Estado de 31 de Diciembre de 1872, que previno no fuera forzosa su circulacion ni se admitiera en pago de contribuciones, recayendo la pérdida del valor sobre los tenedores de la moneda, sin recibir indemnizacion alguna por el menoscabo que sufren en su propiedad; que la Legislatura de Sinaloa carece de toda facultad para rechazar y hacer cesar en su circulacion una moneda acuñada en una oficina federal, cual es la de Culiacan, y emitida bajo la garantía de que sería recibida, no solo por los particulares, sino tambien por las autoridades que le dieron curso legal y forzoso.

Con fundamento de los artículos 27 y 72 fraccion 23, y 111 fraccion 3<sup>a</sup> de la Constitución federal, se decreta: que es de revocarse y se revoca la sentencia del inferior, que declaró: que la Justicia de la Union no ampara ni protege á los Sres. Bartinng Hermanos y C<sup>a</sup>, contra la providencia del C. Tesorero del Estado de Sinaloa, que se negó á recibirles la cantidad de trescientos diez y siete pesos sesenta y un centavos en moneda de cobre, en cumplimiento del decreto

número 35 de 31 de Diciembre de 1872, expedido por la Legislatura del Estado, y se declara: que la Justicia de la Union ampara y protege á los mismos Señores contra dicho acto.

Devuélvase las actuaciones al Juzgado de su origen, con copia certificada de esta sentencia para los efectos consiguientes; publiquesse, archivándose á su vez el Toca.

Así por mayoría de votos lo decretaron los CC. Presidente y Ministros que formaron el Tribunal pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, y firmaron.—José M. Iglesias.—Juan J. de la Garza.—José María Lozano.—José Arteaga.—Ignacio Ramirez.—M. de Castañeda y Nájera.—J. M. del Castillo Velasco.—M. Auza.—Simon Guzman.—M. Zavala.—Lic. Enrique Landa, secretario.

Es copia. México, 31 de Diciembre de 1873.—Lic. Emilio Ordaz, oficial mayor interino.

## AMPARO

*Promovido ante el juzgado del Distrito de Zacatecas por Blas Navarro, contra la providencia del Administrador de rentas del Fresnillo, que mandó retenerle una parte de la carga que conducía de Durango con direccion á Guanajuato, por no estar amparada toda ella con los documentos aduanales respectivos, y para asegurar el pago de triples derechos, en tanto que resolvía sobre el particular la Legislatura del Estado.*

PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

Al Juzgado de Distrito.

El Promotor fiscal dice: que en siete del corriente, el C. Blas Navarro, vecino del Fresnillo, se presentó exponiendo que el 29

del pasado llegó á aquella ciudad, procedente del Estado de Durango de tránsito para el de Guanajuato, con un pequeño cargamento de chile seco, y que por no haber alcabalas en el primer Estado de los referidos, venía resguardado por cartas de envío; y como el primer alcabalatorio que tocó fué Fresnillo, se presentó inmediatamente á la Administracion de rentas, dejando su carga en la Garita del Norte, exhibiendo dichas cartas, y pidióse le espidieran los documentos respectivos conforme á lo dispuesto en el artículo 32 de la ley de 4 de Enero de este año, segun lo habia hecho en otros viajes anteriores; pero que el Administrador D. Sixto Dena se negó á dárselos, exigiéndole asegurara el pago de los derechos triples mientras resolvía el Congreso, á lo que no accedió por que no habia razon para ello, y por que su pobreza le impone la imposibilidad de dar tal caucion: que dos dias despues, dicho Administrador dispuso trasladar la carga á la Aduana, donde la hizo romanear y depositar, sin embargo de haberle hecho presentes los perjuicios que le causaba la detencion, pues habia consumido los pocos recursos que traia, en los gastos del viage, pasturas de bestias y jornales de sirvientes, sin que hubiera vencido en otros dos dias la inflexibilidad del Sr. Dena; pasó á esta ciudad á presentarse al C. Gobernador haciéndole presente el atropello que habia sufrido, y cuya suprema autoridad le dispuso volviera á Fresnillo á reclamar al Administrador de rentas la devolucion de su carga, lo que verificó el 5 y 6 del actual sin obtener resultado, y sin que se le diera un certificado de la detencion de su carga para volver con él á presentarse al C. Gobernador, pues aunque el dia cinco le ofreció dárselo en la tarde, no lo cumplió por haberse ido á los baños de Santa Cruz, y cree por lo mismo que la indebidá y prolongada detencion de su carga, importa una flagrante violacion de las garantías que otorga á todos los hombres la Constitucion general en los artículos cuarto, décimo-sexto y vigési-